

JUICIO ORAL SANCIONADOR

EXPEDIENTE: JOS-TP-69/2018

DENUNCIANTE: PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

DENUNCIADOS: NORMA
ALEJANDRA LOPEZ PORTILLO
ACOSTA Y PARTIDO MORENA

MAGISTRADA PONENTE: CARMEN
PATRICIA SALAZAR CAMPILLO.

Hermosillo, Sonora, a veintisiete de julio de dos mil dieciocho.

VISTAS, las actuaciones del juicio oral sancionador, identificado con la clave **JOS-TP-69/2018**, integrado con motivo de la denuncia presentada por Óscar Adán Valencia Domínguez, en su carácter de Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional, ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en contra de Norma Alejandra López Portillo Acosta, en su calidad de candidata al cargo de Presidente Municipal de Álamos, Sonora, por la presunta realización de conductas que contravienen las normas sobre propaganda política o electoral, así como en contra del partido MORENA, por su responsabilidad en la modalidad de "culpa in vigilando", todo lo demás que fue necesario ver; y,

RESULTANDOS

I. Antecedentes. De los hechos narrados en las denuncias, así como de las constancias que obran en el expediente, se desprende lo siguiente:

1. Inicio del Proceso Electoral. Como un hecho notorio, se tiene que por Acuerdo CG26/2017, de fecha ocho de septiembre de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, aprobó el inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, para la elección de Diputados y Ayuntamientos en el Estado de Sonora.

2. Inicio del periodo de campañas. Es un hecho notorio para este Tribunal, que mediante Acuerdo CG27/2017, el Consejo General del citado Instituto Electoral local, aprobó el calendario integral para el proceso electoral ordinario.

antes mencionado, en el que se señaló el periodo de campañas, que lo es del 19 de mayo al 27 de junio de dos mil dieciocho.

2. Presentación de la denuncia. Con fecha veintiuno de junio de dos mil dieciocho, Oscar Adán Valencia Domínguez, en su carácter de Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, presentó ante la referida autoridad administrativa electoral, denuncia de hechos, en contra de Norma Alejandra López Portillo Acosta, en su calidad de candidata al cargo de Presidente Municipal de Álamos, Sonora, por la presunta difusión de propaganda electoral contraria a la ley, así como en contra del partido MORENA por su responsabilidad en la modalidad de "culpa in vigilando", que hace consistir en el hecho de haber tenido conocimiento, el día dieciocho de junio del presente año, que en diversas colonias del municipio de Álamos, Sonora, se realizaba la entrega de una especie de volantes, que en términos similares, contienen mensajes que se traducen en una falta de respeto hacia el candidato que representa su partido, sobre falsos argumentos y señalamientos que afectan la imagen de dicho candidato; agrega que dicha propaganda fue distribuida por personas que se identificaban como militantes y simpatizantes del partido MORENA, lo cual en su opinión, constituye una violación a lo previsto por el artículo 208, último párrafo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. Asimismo solicitó se dictaran las medidas cautelares pertinentes.

II. Sustanciación ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.

1. Recepción y trámite de la denuncia. Mediante auto de fecha veinticuatro de junio de dos mil dieciocho, la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos tuvo por admitida la denuncia interpuesta por el Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional, registrándola bajo el expediente IEE/JOS-107/2018, así como por ofrecidas sus pruebas sin pronunciarse sobre la admisión de las mismas, por no ser el momento procesal oportuno; de igual manera, en el citado acuerdo se negaron las medidas cautelares solicitadas por tratarse de hechos consumados: se determinó efectuar diversos requerimientos al denunciante. No se señaló día y hora para la celebración de la Audiencia de admisión y desahogo de pruebas hasta que se cumpliera con las prevenciones mencionadas.

2. Fecha para la Audiencia de admisión y desahogo de pruebas. Mediante acuerdos de fechas veintiséis y veintiocho de junio de dos mil dieciocho, una

vez cumplidos los requerimientos efectuados; se tuvo por señalado domicilio para emplazar a la ciudadana denunciada; señalándose las dieciséis horas del día cinco de julio del presente año, para la celebración de la audiencia de admisión y desahogo de pruebas.

3.- Diferimiento de la audiencia de admisión y desahogo de pruebas.- Por auto de fecha cinco de julio del año dos mil dieciocho, se difirió la audiencia de admisión y desahogo de pruebas, en virtud de que las partes no fueron debidamente notificadas; por lo que se fijaron de nueva cuenta las trece horas del día diez de julio del presente año, para que tuviera verificativo la misma.

4.- Reprogramación de audiencia de pruebas. Por auto de fecha doce de julio del presente año, por lo motivos expuestos en el mismo, la autoridad administrativa determinó la imposibilidad de la celebración de la audiencia de admisión y desahogo de pruebas señalada en dicho auto, fijándose para tal efecto las trece horas del día diecisiete de julio de dos mil dieciocho.

5. Audiencia de admisión y desahogo de pruebas. El diecisiete de julio del año en curso, tuvo lugar la audiencia de admisión y desahogo de pruebas, en las instalaciones del mencionado Instituto local, en cuyo desarrollo el Órgano Instructor de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos hizo constar la incomparecencia de los denunciados pese a que fueron notificados en tiempo y forma, así como la comparecencia del representante legal del denunciante; en dicha audiencia se admitieron las probanzas ofrecidas y tomó el acuerdo de dispensar su desahogo.

III. Sustanciación de la denuncia ante el Tribunal Estatal Electoral.

1. Recepción de constancias y radicación. Mediante acuerdo de fecha veintiuno de julio del presente año, se tuvieron por recibidas las constancias del presente juicio, para el efecto de que se continuara con la sustanciación y resolución del mismo, conforme lo establecen los artículos 301 y 303 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. Asimismo la Magistrada Presidenta de este Tribunal Estatal Electoral ordenó registrar las constancias a que se hizo referencia en el numeral anterior como Juicio Oral Sancionador con clave JOS-TP-69/2018 y turnarlo a la ponencia que preside. Igualmente, tuvo por rendido el informe circunstanciado correspondiente y por exhibidas las documentales que remitió la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del Instituto Electoral Local, a que se refiere el artículo 301 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el

Estado de Sonora, y fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia de alegatos a que se refiere el artículo 304, fracción I, de la citada legislación electoral local, ordenando la citación a la partes con la debida oportunidad.

2. Audiencia de Alegatos. Conforme lo ordenado en el auto a que se hizo referencia en el numeral anterior, a las once horas con cuarenta minutos del día veintiséis de julio del presente año, tuvo lugar la audiencia de alegatos, prevista en el artículo 304, fracciones I, II, III y IV de la ley electoral local; en dicha audiencia se hizo constar la incomparecencia de los denunciados pese a que fueron notificados en tiempo y forma, declarándoseles por perdido su derecho para expresar alegatos; se hizo constar la comparecencia del representante legal del denunciante quien ratificó su escrito de denuncia e hizo algunas manifestaciones, mismas que se asentaron en el acta formal que se levantó para tal efecto.

3. Citación para la Audiencia de juicio y resolución. En términos de lo previsto por la fracción IV del artículo 304 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, concluida la audiencia de alegatos, se citó para la audiencia de juicio a las once horas con quince minutos del día veintisiete de julio del presente año, resolución que se dicta hoy, bajo los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. Este Tribunal Estatal Electoral de Sonora, es competente para conocer y resolver el presente Juicio Oral Sancionador, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 22, párrafo veintitrés, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y en los diversos artículos 303, 304 y 305, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, en virtud de que se relaciona con la presunta realización de conductas que contravienen las normas sobre propaganda política o electoral establecidas en la ley, supuesto previsto por la fracción I del artículo 298 de la legislación electoral local.

SEGUNDO. Finalidad del Juicio Oral Sancionador. La finalidad específica del Juicio Oral Sancionador está debidamente precisada, en cuanto a sus alcances y efectos jurídicos, por los artículos 298 y 305 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora.

TERCERO. Escrito de denuncia. De lo expresado por Óscar Adán Valencia Domínguez, en su calidad de Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional, en su escrito de denuncia, se desprende que afirma que el ciudadano y el partido político denunciado, incurrieron en la difusión de propaganda electoral contraria a la ley, que se hace consistir en la difusión y distribución de una especie de volantes, cuyo texto falta al respeto hacia el candidato que representa al partido denunciante, sobre falsos argumentos y señalamientos que afectan la imagen del candidato frente al electorado, para lo cual esencialmente, expone los siguientes hechos:

Respecto del IEE/JOS-107/2018.

[...]"

2.- Es el caso que el día 18 de junio del año en curso, tuve conocimiento que en las calles de distintas colonias de Álamos, Sonora, algunas personas se encontraban distribuyendo una especie de volantes, en los cuales se difundía propaganda político-electoral contraria a la ley, toda vez que el contenido de dichos volantes, contenían una imagen del candidato a presidente municipal, así como las leyendas: "20 años de experiencia, VICTOR BALDERAMA, En trácalas, machicuepas y triquiñuelas; Si como secretario del ayuntamiento de Álamos robó a lo pendejo, imagínate como presidente municipal";

(Imagen)

Lo cual expresamente es una falta de respeto hacia el candidato a la cual representa mi partido, sosteniéndose sobre falsos argumentos, y señalamientos que afectan la imagen frente al electorado.

Es importante establecer que la publicidad ya descrita en párrafos que anteceden, ha sido distribuida por personas que se identifican como militantes y simpatizantes del partido MORENA, pues se ha visto distribuyendo el material denunciado a personas que portan uniforme de dicho partido político. Ello con independencia de que los candidatos de ese partido en reuniones y actos de campaña han hecho pronunciamientos en contra del candidato propuesto por el partido que represento.

*3.- Lo anterior desde la perspectiva de quien suscribe este documento, constituye una violación a la ley electoral, específicamente al numeral 208, último párrafo de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, que claramente establece que tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña **deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados por los partidos políticos y candidatos en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral que para la elección en cuestión hubieran registrado;** teniéndose que la propaganda que difunde el aquí denunciado, por el contrario, provoca encono, hartazgo y molestia entre la ciudadanía ya que con ello se pretende demeritar la imagen del candidato que represento, faltando a la verdad y poniendo en entre dicho su honorabilidad y buen nombre, con la evidente intención de restar apoyo a su candidatura, con lo que se violenta además los principios rectores electorales.*

[...]"

CUARTO. Estudio de fondo.

Previamente a entrar al estudio de fondo, este Tribunal considera de primordial importancia, dejar establecido que, para la sustanciación, análisis y resolución de los diversos juicios relativos al régimen sancionador electoral, en tanto que entrañan la potestad del Estado de castigar una infracción o *ius puniendi*, se deben atender en su integridad ciertos principios del derecho penal, a saber:

- a. Reserva legal (lo que no está prohibido está permitido), así como el carácter limitado y exclusivo de sus disposiciones, esto es, sólo las normas jurídicas legislativas determinan la causa de incumplimiento o falta, en suma, el presupuesto de la sanción;
- b. El supuesto normativo y la sanción deben estar determinados legislativamente en forma previa a la comisión del hecho;
- c. La norma jurídica que prevea una falta o sanción debe estar expresada en una forma escrita (abstracta, general e impersonal), a efecto de que los destinatarios (tanto ciudadanos, como partidos políticos, agrupaciones políticas y autoridades administrativas y jurisdiccionales, en materia electoral) conozcan cuáles son las conductas ordenadas o prohibidas, así como las consecuencias jurídicas que provoca su inobservancia, lo cual da vigencia a los principios constitucionales de certeza y objetividad (en este caso, como en el de lo expuesto en el inciso anterior, se está en presencia de la llamada garantía de tipicidad) y,
- d. Las normas requieren una interpretación y aplicación estricta (odiosa sunt restringenda), porque mínimo debe ser el ejercicio de ese poder correctivo estatal, siempre acotado y muy limitado, por cuanto que los requisitos para su puesta en marcha deben ser estrechos o restrictivos

En este sentido, para privilegiar los derechos humanos de los encausados, así como sus garantías de legalidad, debido proceso y presunción de inocencia, plenamente vigentes en este tipo de procedimientos, este Órgano Colegiado, procederá a analizar el caso planteado a la luz de los mencionados principios.

Sirve de apoyo a lo anterior, como criterio orientador, la Jurisprudencia 7/2005 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del rubro y texto siguiente:

RÉGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. PRINCIPIOS JURÍDICOS APLICABLES.- Tratándose del incumplimiento de un deber jurídico, en tanto presupuesto normativo, y la sanción, entendida como consecuencia

jurídica, es necesario subrayar que por llevar implícito el ejercicio del poder correctivo o sancionador del Estado (ius puniendi), incluido todo organismo público (tanto centralizado como descentralizado y, en el caso específico del Instituto Federal Electoral, autónomo) debe atenderse a los principios jurídicos que prevalecen cuando se pretende restringir, limitar, suspender o privar de cierto derecho a algún sujeto, para el efecto de evitar la supresión total de la esfera de derechos políticos de los ciudadanos o sus organizaciones políticas con la consecuente transgresión de los principios constitucionales de legalidad y certeza, máxime cuando se reconoce que ese poder punitivo estatal está puntualmente limitado por el aludido principio de legalidad. Así, el referido principio constitucional de legalidad electoral en cuestiones relacionadas con el operador jurídico: La ley ... señalará las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de ... (dichas) disposiciones (artículo 41, párrafo segundo, fracción II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), es la expresión del principio general del derecho nullum crimen, nulla poena sine lege praevia, scripta et stricta, aplicable al presente caso en términos de los artículos 3, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, lo cual implica que en el régimen administrativo sancionador electoral existe: a) Un principio de reserva legal (lo no prohibido está permitido), así como el carácter limitado y exclusivo de sus disposiciones, esto es, sólo las normas jurídicas legislativas determinan la causa de incumplimiento o falta, en suma, el presupuesto de la sanción; b) El supuesto normativo y la sanción deben estar determinados legislativamente en forma previa a la comisión del hecho; c) La norma jurídica que prevea una falta o sanción debe estar expresada en una forma escrita (abstracta, general e impersonal), a efecto de que los destinatarios (tanto ciudadanos, como partidos políticos, agrupaciones políticas y autoridades administrativas y jurisdiccionales, en materia electoral) conozcan cuáles son las conductas ordenadas o prohibidas, así como las consecuencias jurídicas que provoca su inobservancia, lo cual da vigencia a los principios constitucionales de certeza y objetividad (en este caso, como en el de lo expuesto en el inciso anterior, se está en presencia de la llamada garantía de tipicidad) y, d) Las normas requieren una interpretación y aplicación estricta (odiosa sunt restringenda), porque mínimo debe ser el ejercicio de ese poder correctivo estatal, siempre acotado y muy limitado, por cuanto que los requisitos para su puesta en marcha deben ser estrechos o restrictivos.

Precisado lo anterior, se procede a examinar los diversos aspectos de las conductas presuntamente infractoras de la normatividad electoral local.

1. Fijación de los hechos imputados, presuntamente constitutivos de infracciones a la normatividad electoral.

Del análisis de la denuncia presentada así como de las diversas constancias que integran el presente expediente, este Tribunal aprecia que la conducta imputada a la denunciada Norma Alejandra López Portillo Acosta, en su calidad de candidata al cargo de Presidente Municipal de Álamos, Sonora, por la presunta realización de conductas que contravienen las normas sobre propaganda política electoral establecidas en la ley, que conforme a los hechos expuestos por la denunciante, se hace consistir en la difusión de propaganda contraria a la ley, como lo es la existencia de una especie de volantes, localizados en calles de diversas colonias de la ciudad de Álamos, Sonora, y que en dicha propaganda se difundían mensajes en contra del candidato del partido denunciante, con señalamientos que afectan su imagen frente al electorado, lo que en opinión del denunciante, constituyen una violación a lo previsto en el artículo 208, último párrafo, de la Ley de Instituciones

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, que establece claramente que tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados por los partidos políticos y candidatos en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral que para la elección en cuestión hubieren registrado, en cambio a consideración del denunciante, dicha propaganda provoca encono, hartazgo y molestia entre la ciudadanía, con la evidente intención de restar apoyo a su candidato registrado.

Litis. La materia del procedimiento sometida a la decisión de este Tribunal Electoral consiste en dilucidar, si en el caso, se actualizan violaciones a la normatividad sobre propaganda político o electoral en términos de lo previsto por el artículo 298, fracción I, en relación con el 208, último párrafo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, por parte de Norma Alejandra López Portillo Acosta, y del partido MORENA por su responsabilidad de *culpa in vigilando*.

2. Marco normativo. Con el propósito de determinar lo que en derecho corresponda, se cita a continuación el marco normativo aplicable al caso concreto.

El artículo 208, párrafo tercero, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, señala que la propaganda electoral comprende los escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que, durante la campaña electoral, producen y difunden los partidos políticos, las coaliciones, los candidatos registrados y sus militantes y simpatizantes respectivos, con el propósito de manifestar y promover el apoyo o rechazo a alguna candidatura, partidos políticos o coaliciones, a la ciudadanía en general.

En el último párrafo del precepto legal en comento establece que tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que se refiere el mismo artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados por los partidos políticos y candidatos en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral que para la elección en cuestión hubieren registrado.

A su vez, los artículos 269 fracción X y 271, fracción IX, de la ley electoral local, disponen que constituyen infracciones para los partidos políticos la difusión de propaganda política o electoral que contenga expresiones que calumnien a las

personas y para los candidatos a cargos de elección popular, el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en dicha ley.

El numeral 298, fracción I, de la mencionada legislación electoral, establece que dentro de los procesos electorales, la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, instruirá el juicio oral sancionador establecido, cuando se denuncie la comisión de conductas que contravengan las normas sobre propaganda política o electoral establecida en la ley.

Así tenemos que, la propaganda electoral es un tipo de comunicación persuasiva, con la finalidad de promover o desalentar actitudes en pro o en contra de un partido político o coalición, un candidato o una causa con el propósito de ejercer influencia sobre los pensamientos, emociones o actos de un grupo de personas simpatizantes con otro partido, para que actúen de determinada manera, adopten sus ideologías o valores, cambien, mantengan o refuercen sus opiniones sobre temas específicos, para lo cual se utilizan mensajes emotivos más que objetivos (SUP-RAP-28/2007 y SUP-RAP-39/2007). Y además, que la misma no solamente se limita a captar adeptos, lo cual es lo ordinario al presentarse ante la ciudadanía las candidaturas y programas electorales con la finalidad de obtener el mayor número de votos, sino que también busca reducir el número de adeptos, simpatizantes o votos de los otros partidos políticos que intervienen en la contienda electoral (Tesis CXX/2002, derivada del asunto SUP-JRC-196/2001).

Por tanto, cualquier difusión de propaganda electoral que contravenga las normas previstas en la legislación electoral, actualiza el supuesto para el conocimiento del juicio oral sancionador.

3. Acreditación de las conductas presuntamente constitutivas de infracción electoral.

Ahora bien, una vez delimitadas las conductas imputadas a Norma Alejandra López Portillo Acosta y al partido MORENA por *culpa in vigilando*, este Tribunal procede a analizar el caudal probatorio existente en autos y admitidas en audiencia de admisión y desahogo de pruebas, a fin de verificar si en la especie se acredita la existencia de las conductas imputadas, en términos de lo establecido por los artículos 289 y 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, en el entendido de que tal análisis versará únicamente con aquellas pruebas que se relacionan directamente con las supuestas conductas infractoras, pues en cuanto a las

diversas probanzas admitidas en la audiencia de mérito, algunas de ellas se encuentran encaminadas a demostrar la personería de las partes, tanto denunciante como denunciada, las cuales no son motivo de controversia, y no tienen relación con la litis de acreditar o no la existencia de dichas infracciones.

4. Presunción de inocencia como estándar probatorio aplicable

Acorde con el criterio asumido en la Jurisprudencia 21/2013 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la presunción de inocencia es un principio que debe observarse en los procedimientos sancionadores en materia electoral, el cual tiene tres vertientes:

- a) como regla de trato al individuo bajo proceso;
- b) como regla probatoria; y
- c) como regla de juicio o estándar probatorio.

Como estándar probatorio, la presunción de inocencia es un criterio para indicar cuando se ha conseguido la prueba de un hecho, lo que en materia de sanciones se traduce en definir las condiciones que el material convictivo de cargo (aquel encaminado a justificar la comisión de la conducta prohibida) debe satisfacer a efecto de considerarse suficiente para condenar.

Desde esa óptica, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que es posible derrotar la presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo desvirtúen las hipótesis de inocencia efectivamente alegadas por la defensa en el juicio y, al mismo tiempo, en el caso de que existan, se derroten las pruebas de descargo (aquellas que justifican la inocencia) y los contraindicios que puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora.

En un sentido similar, la Sala Superior estableció recientemente que un método compatible con la citada presunción en los procedimientos sancionadores en materia electoral consiste en efectuar un análisis de las probanzas en el que:

- I. La hipótesis de culpabilidad alegada por los denunciantes sea capaz de explicar los datos disponibles en el expediente, integrándolos de manera coherente.

II. Se refuten las demás hipótesis plausibles explicativas de los mismos datos que sean compatibles con la inocencia del acusado; esto es, se descarte la hipótesis de inocencia alegada por la parte acusada.

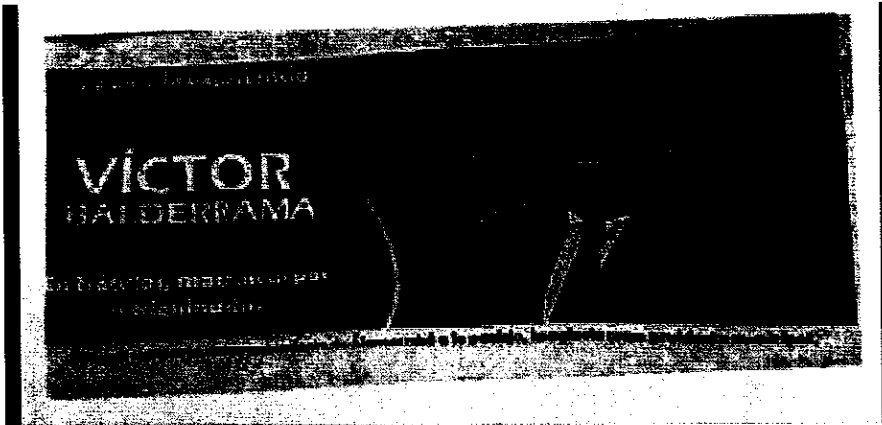
En el caso concreto, en aplicación del principio de presunción de inocencia para tener por acreditada la presunta infracción que aduce el denunciante, este Tribunal debe advertir, que los datos que ofrece el material probatorio que obra en el expediente sea consistente con la acusación, permitiendo integrar toda la información que se genera de manera coherente, en el sentido de establecer que la denunciada Norma Alejandra López Portillo Acosta, realizó propaganda electoral prohibida por la Ley electoral local.

5. Análisis y valoración de las pruebas.

En el presente caso se cuenta con una denuncia presentada por el representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, en contra de Norma Alejandra López Portillo Acosta, en su calidad de candidata al cargo de Presidente Municipal, de cuyo análisis se desprende información en el sentido de que el día dieciocho de junio del año en curso, tuvo conocimiento de la existencia de una especie de volantes en las calles de las distintas colonias de ese municipio de Álamos, Sonora, en los cuales se difundía propaganda político electoral contraria a la ley, cuyo texto falta al respeto hacia el candidato que representa al partido denunciante, sobre falsos argumentos y señalamientos que afectan la imagen del candidato frente al electorado, que lo anterior en su opinión, constituye una violación a la ley electoral concretamente a lo previsto por el artículo 208, último párrafo de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora.

Para efecto de resolución por éste Órgano jurisdiccional, se analizan y valoran las pruebas ofrecidas por el denunciante y que fueron admitidas en la audiencia respectiva celebrada ante la autoridad administrativa, con fecha diecisiete de julio de dos mil dieciocho, consistente en la propaganda impresa, motivo de los hechos que se denuncia en el escrito, que fueron admitidas como documentales por el Órgano Instructor, de conformidad con lo establecido por el artículo 300 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y el diverso 66 del Reglamento para la sustanciación de los regímenes sancionadores electorales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.

En la denuncia, refiere que tuvo conocimiento de la existencia de los supuestos volantes el día dieciocho de junio del presente año, para lo cual se inserta la imagen de dicha probanza:



De la misma se observa que se trata de una hoja de papel blanca, en la cual aparece una imagen de una persona del sexo masculino con traje, camisa blanca, corbata, y una leyenda que dice:

***“20 años de experiencia
VÍCTOR
BALDERRAMA***

***En trácalas, machincuepas
y triquiñelas***

***Si como secretario de ayuntamiento de Álamos robó, imagínate como
presidente municipal”***

Al anterior medio de prueba, se le confiere valor indiciario en términos de lo previsto por el artículo 289 y 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como a los principios de la ley electoral, en la medida que produzcan convicción sobre los hechos denunciados.

6. Consideraciones de este Tribunal al caso concreto.

En relación a la conducta infractora objeto de análisis, consistente en difusión de propaganda electoral contraria a la ley, este Tribunal estima que la misma es inexistente, por las razones que a continuación se exponen:

Resulta necesario precisar que en el considerando cuarto de la presente resolución, se reseñó el marco jurídico que rige para el asunto en estudio, normas de las cuales se puede advertir que tienen como propósito garantizar que la propaganda electoral que se difunda por los partidos políticos y los candidatos, durante el periodo de campaña, se desarrollen en un marco de

legalidad de manera general y en forma específica al caso, en un ambiente en el que se propicie la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados por los partidos políticos y candidatos en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral que para la elección en cuestión hubieren registrado y no la propaganda tendiente a desacreditar a sus oponentes, en un ambiente de equidad para los contendientes, como son los partidos políticos, precandidatos y candidatos, para evitar que una opción política esté en ventaja en relación con sus opositores, y evitar conductas que contravengan las normas sobre propaganda política o electoral establecida en la ley.

Del material probatorio aportado al sumario, esta autoridad advierte que los mismos constituyen indicios aislados no corroborados entre sí, por tanto insuficientes para demostrar los hechos denunciados y atribuidos a Norma Alejandra López Portillo Acosta, en su calidad de candidata al cargo de Presidente Municipal de Álamos, Sonora, y al partido político MORENA.

Tal aseveración se debe al hecho de que sólo se logró acreditar la existencia de una papeleta o lo que llama el denunciante una especie de volantes, que si bien contienen leyendas que pueden considerarse contrarias a lo previsto en el último párrafo del artículo 208, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, lo cierto es que, no se demostró que se hubieran distribuido en algún lugar de la ciudad de Álamos, Sonora, así como la cantidad de los mismos, ni le constan de manera personal y directa al denunciante, pues refiere que tuvo conocimiento de los hechos, pero no que le constaran, tampoco se proporcionan circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se llevó a cabo la supuesta distribución o difusión, mucho menos que los ahora denunciados tuvieran participación en la supuesta difusión de los mismos, pues solamente fueron señalamientos y cuestionamientos que no pueden ser atribuibles en este caso a la parte denunciada.

De igual forma, no se comprobó que la posible distribución de los volantes señalado en el escrito de denuncia, haya sido realizada por militantes del partido MORENA; esto es, no se probó la identidad de persona alguna, con lo cual no se acredita, que la supuesta difusión de volantes se hubiera llevado a cabo por miembros integrantes del instituto político denunciado.

Al respecto, la Sala Superior, así como la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los juicios SUP-REC-618/2015 y ST-JRC-206/2015 establecieron que la operatividad de la prueba indicia no

consiste en la simple suma de indicios, sino en el método de la hipótesis que llega a ser acreditada más que por la simple adición de varios indicios, por el producto que se extrae de la interrelación de todos ellos.

De ahí que la indiciaria presupone: 1) Que los hechos que se toman como indicios estén acreditados, no que se trate de hechos de los que sólo se tiene un indicio, en tanto que no cabe construir certeza sobre la base de simples probabilidades; 2) Que concurra una pluralidad y variedad de hechos demostrados, generadores de esos indicios: dos o más; 3) Que guarden relación con el hecho que se trata de demostrar, y 4) Que exista concordancia entre ellos.

Por lo anterior, más allá de la mera afirmación del denunciante, las pruebas que aportó sólo adquirieron la calidad de indicios aislados, pues no se encuentran concatenadas entre sí o con diverso medio probatorio, por lo que resulta insuficiente para acreditar lo que afirma en su escrito de denuncia.

Precisado lo anterior y siguiendo los parámetros dados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a juicio de éste Tribunal Electoral, no existe la concurrencia de elementos necesarios para actualizar la comisión de conductas que contravengan las normas sobre propaganda política o electoral establecidas por la ley, dado que no se tiene debidamente probados las violaciones aducidas por el denunciante, precisamente por la insuficiencia de pruebas para demostrar su dicho; máxime que corresponde al quejoso allegar mayores elementos de convicción conforme a la carga procesal que este tipo de procedimiento le impone; ello de acuerdo con el criterio de la Jurisprudencia 12/2010 de rubro: **“CARGA DE LA PRUEBA EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE”** lo cual, es acorde al principio general del Derecho “el que afirma está obligado a probar”.

Esto es así, pues en los juicios orales sancionadores, de conformidad con el artículo 299, cuarto párrafo, fracción V, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, el denunciante tiene en principio, la carga de la prueba de exhibir los medios probatorios que estén a su alcance, con la finalidad de acreditar la comisión de las conductas infractoras que denuncia, situación que en la especie, no ocurrió.

En mérito de lo expuesto, se concluye que no es posible tener por actualizadas la comisión de conductas que contravengan las normas sobre propaganda

política o electoral establecida en la ley, con motivo de lo publicado en unos supuestos volantes, al tenor del principio de presunción de inocencia que rige en el procedimiento especial sancionador.

En tal sentido, en términos de lo previsto por el artículo 305, fracción I, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo procedente es declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia.

En consecuencia y por los motivos y fundamentos expuestos, este Pleno del Tribunal Electoral considera que no es dable tener por acreditada la comisión de la infracción consistente en la realización de conductas que contravengan las normas sobre política o electoral por parte de Norma Alejandra López Portillo Acosta, en su calidad de candidata al cargo de Presidente Municipal de Álamos, Sonora.

Culpa in vigilando. En el caso resulta innecesario su análisis, en relación con el partido MORENA, ya que como quedó asentado no se actualizó por parte del ciudadano denunciado, la comisión de conductas que contravengan las normas sobre propaganda política o electoral en términos de los artículos 208, último párrafo y 298, fracción I, de la legislación electoral local, lo cual resulta suficiente para no atribuir al mencionado partido político responsabilidad alguna bajo la figura de la *culpa in vigilando*.

Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 304 y 305 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, el Pleno de este Tribunal Estatal Electoral, resuelve el presente asunto bajo el siguiente:

PUNTO RESOLUTIVO

UNICO. Por las razones expuestas en el considerando **CUARTO** de la presente resolución, se declara la inexistencia de la violación objeto de la denuncia, consistente en la presunta realización de conductas que contravienen las normas sobre propaganda política o electoral, presentada por el Partido Revolucionario Institucional, en contra de Norma Alejandra López Portillo Acosta, en su calidad de candidata al cargo de Presidente Municipal de Álamos, Sonora, así como del partido político MORENA, por su responsabilidad en la modalidad de *culpa in vigilando*.


NOTIFÍQUESE personalmente a las partes en los domicilios señalados en autos, con copia certificada que se anexe de la presente resolución, de igual

manera, mediante oficio al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, y por estrados a los demás interesados.


Así lo resolvieron por unanimidad de votos, en sesión pública de fecha veintisiete de julio de dos mil dieciocho, los Magistrados integrantes del Tribunal Estatal Electoral de Sonora, Carmen Patricia Salazar Campillo, Jesús Ernesto Muñoz Quintal y Leopoldo González Allard, bajo la ponencia de la primera de los mencionados, ante el Secretario General, Licenciado Héctor Sigifredo II Cruz Íñiguez, que autoriza y da fe. Conste.



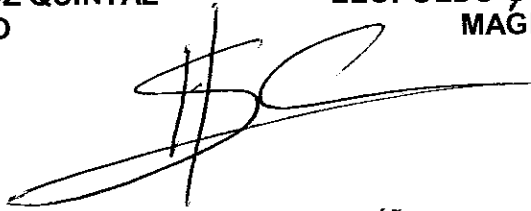
CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO
MAGISTRADA PRESIDENTA



JESÚS ERNESTO MUÑOZ QUINTAL
MAGISTRADO



LEOPOLDO GONZÁLEZ ALLARD
MAGISTRADO



HÉCTOR SIGIFREDO II CRUZ ÍÑIGUEZ
SECRETARIO GENERAL